

Fecha <b>16.01.2009</b>	Sección <b>Nacional</b>	Página <b>22</b>
----------------------------	----------------------------	---------------------

# Diputados indagarán el *playazo*

*El instituto tamaulipeco de la vivienda confirma que la cesión del frente de playa al sindicato petrolero sí fue ordenada por el gobernador*

**POR ADÁN MOCTEZUMA**

CORRESPONSAL  
estados@nuevoexcelsior.com.mx

TAMPICO.— Diputados federales del PAN anunciaron que promoverán la integración de una comisión que investigue la entrega de 150 hectáreas de frente de playa en Miramar, el desarrollo turístico de Ciudad Madero, Tamaulipas al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Beatriz Collado, diputada federal panista, indicó que este tipo de acciones dan de qué hablar, siembran sospecha y causan molestia a los habitantes del sur de Tamaulipas porque, dijo, ahora se ve cómo el patrimonio de los ciudadanos queda en manos de un sindicato de manera muy poco clara.

“Las opiniones que hemos recibido de los maderenses nos indican que hay una gran indignación por la entrega que se hizo al sindicato de la playa de Miramar, pues esa playa es de los maderenses”, dijo Collado.

La legisladora anunció que alista una solicitud para que se lleve a cabo una investigación.

El también diputado federal Luis Alonso Mejía aseguró que, tras este escándalo, hay un interés político y electoral entre el gobierno estatal y el sindicato petrolero.

En tanto, el presidente del partido Convergencia en Tamaulipas, Emiliano Fernández Canales, exigió una investigación no sólo al proceso de entrega, sino al alcalde, para determinar responsabilidades.

En días pasados, Posadas Lara culpó al gobierno de Eugenio Hernández de operar la transferencia.

El alcalde aseguró que la manobra legal fue operada por el Instituto Tamaulipeco de Apoyo a la Vivienda Urbana (ITAVU).

Al respecto, Homero de la Garza, director del ITAVU, confirmó que, en efecto, el gobierno del estado en-

tregó las 150 hectáreas al sindicato, aunque insistió en que fue de manera legal.

“Nosotros cumplimos con un mandato judicial y es responsabilidad del Instituto regularizar las tierras”.

Al cuestionarle detalles legales, De la Garza argumentó que la oficina del gobernador emitiría una postura oficial al respecto.

Hasta ayer, el sustento legal de esta cesión de terrenos en Miramar no ha sido aclarada por la autoridad estatal.

Las opiniones de los maderenses nos indican que hay indignación por la entrega que se hizo al sindicato.”

BEATRIZ COLLADO  
DIPUTADA PANISTA

